



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

DON JOSE GIMENEZ CERVANTES, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA:

Que en la Sesión del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 7 de enero de 2003, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el que se aprueba la:

**RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ESTA COMISIÓN, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2002, QUE RESUELVE EL CONFLICTO DE INTERCONEXIÓN PLANTEADO POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA RESOLVER EL VIGENTE ACUERDO GENERAL DE INTERCONEXIÓN CON REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. POR IMPAGO DE SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN PREVIAMENTE CONSUMIDOS, Y PARA DESCONECTAR AMBAS REDES (RO 2002/7245).**

En relación con el recurso potestativo de reposición interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 21 de noviembre de 2002 (RO 2002/7245), el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. 01/03 del día de la fecha, la siguiente

Resolución de 7 de enero de 2003, recaída en el expediente AJ 2002/7922:

### HECHOS

**PRIMERO.-** La entidad Telefónica de España, S.A.U (en adelante Telefónica) solicitó a esta Comisión, mediante escrito de fecha 18 de julio de 2002, la autorización para la desconexión y posterior resolución del Acuerdo General de Interconexión vigente entre esta entidad y la empresa Redes y Servicios Liberalizados, S.A. (en adelante RSL), como consecuencia del impago reiterado de las cantidades derivadas de la previa prestación de diversos servicios de interconexión y de tráficos prestados entre los años 2000 y 2002. Asimismo, Telefónica solicitaba la adopción de una medida cautelar consistente



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

en obligar a RSL a constituir un aval que garantizase las cantidades adeudadas y las que se vayan adeudando hasta que se dicte la resolución final en el expediente que se tramite al efecto.

Por su parte, la empresa RSL presentó sendos escritos a esta Comisión y exponía, entre otras cuestiones, que Telefónica también le adeudaba a ella una cantidad de dinero en concepto de diversos tráficos y otros servicios de interconexión, así como la regularización de pagos.

**SEGUNDO.-** De acuerdo con los escritos de las entidades Telefónica y RSL, por los Servicios de esta Comisión se inició el correspondiente expediente administrativo al efecto (RO 2002/7245). Una vez tramitado el mismo, con audiencia de las partes interesadas, con fecha 21 de noviembre de 2002 se dictó Resolución en cuya parte dispositiva se establecía lo siguiente:  
“(…)

### RESUELVE

**Primero.-** Declarar que en el Conflicto de Interconexión planteado entre TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (TELEFÓNICA) y REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. (RSL), planteado por la primera, ha quedado acreditada la concurrencia de la causa de resolución recogida en la Cláusula número 15.1.4 del Acuerdo General de Interconexión de 29 de julio de 1999 (AGI) vigente entre ambos operadores, así como la concurrencia de la causa de suspensión de la interconexión prevista en la Cláusula número 12.5 del mismo Acuerdo, a saber, el incumplimiento grave por parte de RSL de una obligación esencial, cual es el pago de determinados servicios de interconexión previamente consumidos, consolidados y facturados, y el transcurso de 2 meses desde que TELEFÓNICA efectuó el requerimiento por escrito del cumplimiento de dicha obligación (es decir, desde que emitió cada factura impagada).

**Segundo.-** Autorizar a TELEFÓNICA a resolver el AGI o, si lo prefiere, a suspender temporalmente la interconexión entre ambas redes, y a la subsiguiente desconexión de su red de la de RSL en ambos casos, si desde que vuelva a ser exigible y ejecutable de manera individualizada la deuda actualmente integrada en la masa pasiva de la suspensión de pagos, RSL no la satisface en el plazo de cinco días naturales desde que aquélla le requiera en uno u otro sentido.

En el caso de que el procedimiento judicial de suspensión de pagos no llegue a buen término por no lograrse la aprobación de un Convenio entre los acreedores y el suspenso, la autorización a la que se refiere la presente Resolución se referirá al impago de la deuda que se determine en el Informe de la Intervención Judicial de RSL, y en su defecto por la deuda reconocida por RSL en su solicitud de suspensión de pagos de 21 de agosto de 2002. Sin perjuicio de lo anterior, TELEFÓNICA podrá solicitar a la CMT la resolución del AGI o la suspensión de la interconexión entre ambos operadores (en ambos casos con la consiguiente desconexión de ambas redes) por eventuales impagos posteriores al 21 de agosto de 2002, o por impagos anteriores no reconocidos por RSL.

TELEFÓNICA deberá informar inmediatamente a esta Comisión del envío del requerimiento de pago a RSL, así como sobre las actuaciones posteriores al respecto, en especial si, ante el impago de RSL en el citado plazo de cinco días naturales, TELEFÓNICA ejecutase su facultad para resolver el AGI o para suspender temporalmente su vigencia, y en cualquiera de los casos para desconectar su red de la de RSL.

Realizada la desconexión de ambas redes, en las llamadas procedentes de clientes de acceso de TELEFÓNICA que seleccionen a RSL a través de cualquiera de los sistemas de selección de operador existentes, o que tengan como destino un número de RSL, TELEFÓNICA no cursará la llamada e informará al usuario llamante mediante una locución al efecto la imposibilidad de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*cursar la misma por extinción de la interconexión o por o suspensión temporal de la misma (lo que proceda en cada caso) con el operador RSL.*

**Tercero.-** *Elevar a definitiva la medida cautelar adoptada por esta Comisión mediante las Resoluciones de su Consejo de 8 de agosto de 2002 y de 3 de octubre de 2002, y mediante la cual RSL está obligada a constituir un aval económico en favor de TELEFÓNICA que garantice las cantidades que le adeude aquel operador a éste desde el día 21 de agosto de 2002 en concepto de consumo de servicios de interconexión y de recursos de red."*

**TERCERO.-** Con fecha 29 de noviembre de 2002, se ha recibido en esta Comisión escrito de la entidad Telefónica mediante el cual se interpone recurso potestativo de reposición contra la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la que se refiere el antecedente de hecho anterior.

La entidad recurrente solicita se estime íntegramente el recurso planteado y se dicte una resolución por la que se autorice la resolución del AGI y la desconexión de redes automáticamente. Telefónica muestra su disconformidad con la Resolución impugnada con base en los siguientes argumentos:

- La recurrente considera que esta Comisión confunde la exigibilidad de la deuda con la ejecutabilidad de la misma, puesto que la existencia de un procedimiento de suspensión de pagos no influye en la exigibilidad de las obligaciones sino en la ejecutabilidad individual de las mismas. Por lo tanto, no se puede condicionar la resolución del AGI a la existencia de la suspensión de pagos, pues las deudas que tiene pendiente con ella son exigibles y están vencidas.
- Asimismo, se alega que la autorización de la CMT para resolver su AGI y la desconexión de la red no puede condicionarse al buen fin de la suspensión de pagos puesto que son cuestiones radicalmente diferentes y perfectamente compatibles. En este sentido manifiesta que tiene derecho a resolver el contrato y a la desconexión de las redes al tiempo que tiene derecho a que RSL le resarza su crédito, sin perjuicio de que éste último derecho se encuentra supeditado a un proceso de suspensión de pagos. A su entender, si al finalizar el procedimiento de suspensión de pagos Telefónica consiguiera resarcir su crédito, no por ello se puede omitir que el contrato fue incumplido y no se extingue la causa resolutoria.
- Por último, se alega de contrario que esta Comisión deberá acordar la resolución del AGI y la desconexión de las redes de manera automática, sin matices ni condicionantes. La recurrente considera que, en el presente caso, no hay perjuicio ni trastornos para los usuarios en general, como tampoco lo hay para los clientes de RSL en particular, pero un mantenimiento de la conexión con un acreditado incumplimiento genera inseguridad jurídica y altera el equilibrio económico de Telefónica, lo que paralelamente produce un efecto reflejo en el sector y, en concreto, en la ejecución de otros AGI,s vigentes con otros operadores.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**CUARTO.-** En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), mediante escrito del Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 3 de diciembre del año en curso, se notificó a la entidad Redes y Servicios Liberalizados, S.A. la interposición del recurso interpuesto por Telefónica y se dio traslado de una copia del mismo para que en el plazo de diez días alegase cuanto estimase procedente.

Finalizado el plazo conferido al efecto, la citada entidad ha presentado alegaciones al recurso presentado manifestando su total disconformidad al recurso presentado.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

#### I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PROCEDIMENTALES.

##### **PRIMERO.- Calificación.**

El artículo 107 de la LRJPAC, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica, establece que contra las resoluciones podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.

La recurrente califica expresamente su escrito de 29 de noviembre 2002 como de recurso de reposición, por lo que teniendo en cuenta lo anterior y que las Resoluciones de esta Comisión ponen fin a la vía administrativa, procede a tenor de lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, que prevé que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, calificar al escrito presentado como un recurso potestativo de reposición que se interpone contra la Resolución de esta Comisión de 21 de noviembre de 2002.

No obstante, y tal y como ella misma reconoce al principio del primer motivo, cabe aclarar que el recurso presentado por Telefónica constituye una impugnación de la citada Resolución en lo que al resuelve segundo se refiere.

##### **SEGUNDO.- Competencia y plazo para resolver.**

La competencia para resolver el presente recurso corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, al Consejo de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado. Este recurso deberá ser resuelto y su resolución notificada en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su interposición, según lo establecido en el artículo 117.2 de la misma Ley.

### **TERCERO.- Admisión a trámite.**

El recurso ha sido interpuesto cumpliendo con todos los requisitos de forma establecidos en el artículo 110.1 de la LRJPAC, por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, procede admitir a trámite el recurso interpuesto.

## **II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS MATERIALES.**

### **PRIMERO.- Respecto de la diferencia entre la exigibilidad y la ejecutabilidad de las deudas ante la suspensión de pagos de RSL.**

Telefónica manifiesta su disconformidad con la resolución recurrida por cuanto que confunde la exigibilidad de la deuda con la ejecutabilidad de la misma. Dicha premisa la considera fundamental la recurrente para defender que, la existencia de un procedimiento de suspensión de pagos no influye en la exigibilidad de las obligaciones, sino en la ejecutabilidad individual de las mismas, y, por lo tanto, no se puede condicionar la resolución del AGI a la existencia de la suspensión de pagos, siendo de aplicación el artículo 1.124 del Código civil, pues a pesar de ello las deudas que tiene pendiente son exigibles y están vencidas.

Si bien en la resolución ahora recurrida pudiera parecer que no se distingue claramente entre la exigibilidad y la ejecutabilidad (distinción que se comparte por esta Comisión), no obstante, la presente alegación en nada afecta al resultado de fondo adoptado por la resolución impugnada tal y como se irá contestando a lo largo de la presente resolución.

Cabe recordar a la recurrente que, en el marco de la actual situación jurídica de suspensión de pagos en la que se encuentra este operador RSL, situación regulada por la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922 (en adelante, LSP), se quedan suspendas todas las acciones individuales en curso (incluidas las de Telefónica) contra el patrimonio del deudor suspenso, RSL, para integrarse necesariamente en la masa pasiva de la suspensión de pagos, en igualdad de condiciones que el resto de las deudas de dicha entidad, en virtud del principio de la igualdad de derechos de todos los créditos pendientes integrados en la masa pasiva de la suspensión de pagos y la imposibilidad de privilegiar a unos en detrimento de los otros (la “par conditio creditorum”, con escasas excepciones expresamente tasadas en las leyes: créditos laborales, hipotecarios, etc.).



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Sin perjuicio de lo anterior, lo que la resolución impugnada pretende poner de relieve a los efectos de su intervención regulatoria, es que desde la presentación de la solicitud de suspensión de pagos (el 21 de agosto de 2002), y mientras se sustancia y resuelve el expediente judicial, todas las deudas derivadas de relaciones jurídicas nacidas con anterioridad al inicio del citado procedimiento de suspensión de pagos se verán afectadas y vinculadas por las consecuencias jurídicas del mismo a las que se ha hecho mención anteriormente.

En nuestro caso concreto, y como no podía ser de otro modo, en la decisión tomada por parte del organismo regulador se ha tenido en cuenta las citadas consecuencia jurídica del proceso de suspensión de pagos que afecta en estos momentos a la entidad RSL. De acuerdo con ello, se acordó autorizar lo solicitado si desde que vuelva a ser ejecutable de manera individualizada la deuda actualmente integrada en la masa pasiva de la suspensión de pagos, RSL no la satisface en el plazo de cinco días naturales desde que aquélla le requiera en uno u otro sentido, y todo ello -además- en relación con las otras circunstancias concurrentes del caso (que se señalan más adelante), sin que por ello se haya cometido infracción legal alguna que invalide la resolución ahora recurrida.

### **SEGUNDO.- Sobre las consecuencias que esta Comisión atribuye al buen o mal fin del procedimiento de suspensión de pagos de RSL en curso.**

Telefónica cuestiona que la autorización de la CMT para resolver su AGI y la desconexión de la red no puede condicionarse hasta que la deuda de RSL vuelva a ser ejecutable de manera individualizada, es decir, al buen fin de la suspensión de pagos, puesto que son cuestiones diferentes y perfectamente compatibles, argumentando además que puede resolverse el AGI aunque no se pueda cobrar la deuda.

En este sentido manifiesta que, Telefónica tiene derecho a resolver el contrato y a la desconexión de las redes al tiempo que tiene derecho a que RSL le resarza su crédito, sin perjuicio de que éste último derecho se encuentra supeditado a un proceso de suspensión de pagos. Se alega de contrario que, si al finalizar el procedimiento de suspensión de pagos Telefónica consiguiera resarcir su crédito, no por ello se puede omitir que el contrato fue incumplido y no se extingue la causa resolutoria.

Sin embargo, dicho argumento deja al margen la normativa sectorial de telecomunicaciones, esto es, los artículos 22, 23 y 25 de la Ley General de Telecomunicaciones, y en su desarrollo los artículos 2.1, 2.4, 2.6 y 11 del Reglamento de Interconexión, así como el Contrato-tipo de la Oferta de Interconexión de Referencia de Telefónica y el vigente AGI de 29 de julio de 1999, en virtud de los cuales no cabe la resolución del AGI hasta que esta Comisión le autorice a ello, para lo cual deberá ponderar todos los intereses y



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

circunstancias en juego, y todo ello en el seno del mercado de las telecomunicaciones y no sólo como si de una relación jurídica privada se tratara con aplicación de la normativa puramente civil.

Así, y en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente reconocidas, esta Comisión no puede desconocer la situación jurídica actual de RSL y las consecuencias jurídicas que se derivan de la existencia de un procedimiento judicial de suspensión de pagos en trámite. Al mismo tiempo, el conocimiento de esta realidad jurídica deberá hacerse en relación directa con los intereses y efectos que de ello se derivan para el sector de la telecomunicaciones y, en este caso concreto, para el derecho a la interconexión. En definitiva, la presente intervención regulatoria se fundamenta en la normativa sectorial de telecomunicaciones, la cual es perfectamente compatible con la que se deduce del Derecho Mercantil, y en particular con la regulación de la suspensión de pagos.

En todo caso, como ya se manifestaba en la resolución recurrida, esta Comisión no puede resolver teniendo en cuenta únicamente los términos contractuales del AGI cuyo incumplimiento se ha invocado, sino que ha de velar en sus resoluciones por otros intereses que están también en juego. En este sentido, por ejemplo, no se podría autorizar desconexiones de las redes sin establecer condiciones adicionales garantistas, para el supuesto de que esta desconexión pudiese ocasionar a los usuarios una merma importante de sus posibilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones y a la eficacia de las mismas.

Como se especificará en la contestación al siguiente motivo del recurso, en este caso se han tenido en cuenta los particulares intereses que han entrado en juego en el presente supuesto, y que justifican la decisión ahora adoptada por esta Comisión en el marco de la legalidad vigente, sin que hubiera sido acorde con la normativa sectorial limitar su intervención regulatoria exclusivamente a los términos del acuerdo y a la aplicación de normas del código civil.

Por otro lado, la alternativa a la consecución de un Convenio entre RSL y sus acreedores no es únicamente la quiebra del suspenso, sino que cabe otras posibilidades, como por ejemplo que, antes de que se dicte Auto judicial declarativo, RSL puede conseguir fondos adicionales en el mercado financiero o de un nuevo inversor, o por lograr un aval que garantice el pago de las deudas pendientes, etc., posibilidad que garantizaría la ejecutabilidad de las deudas con garantías de poder cobrar las mismas.

Todas estas posibilidades están previstas en la LSP, por lo que como ya hemos dicho anteriormente no cabe la posibilidad de omitirlas en el caso particular ahora planteado por Telefónica, en virtud del principio de la igualdad de derechos de todos los créditos pendientes integrados en la masa pasiva de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

la suspensión de pagos y la imposibilidad de privilegiar a unos en detrimento de los otros (la “par conditio creditorum”), sin que, además, se tengan en cuenta otras circunstancias relevantes de carácter sectorial que este organismo ha tomado para adoptar su decisión final.

En atención a todo lo anterior, no puede tener favorable acogida las alegaciones ahora esgrimidas por la entidad Telefónica, que además en nada afectan a la legalidad de la Resolución dictada en el procedimiento de referencia.

### **TERCERO.- En relación con la eficacia automática de la resolución del AGI y la desconexión de redes.**

Telefónica abunda en los argumentos reconocidos por esta Comisión en su resolución de 21 de noviembre de 2002, esto es, que se dan los requisitos contractuales establecidos en el AGI para resolver el mismo, que faculta a Telefónica de acuerdo con Cláusula 15.1.4 del Cuerpo General del AGI para resolver dicho contrato y para obtener automáticamente la autorización administrativa pertinente para proceder a la desconexión de las redes.

La recurrente alega en este último motivo que, como en el presente caso no hay perjuicios ni trastornos para los usuarios en general, como tampoco lo hay para los clientes de RSL en particular, el mantenimiento de la conexión con un acreditado incumplimiento genera inseguridad jurídica y altera el equilibrio económico de Telefónica, que paralelamente produce un efecto reflejo en el sector pudiendo afectar a la ejecución de otros AGI,s vigentes con otros operadores.

Con carácter previo, hay que señalar que estos argumentos ahora empleados nuevamente por Telefónica ya fueron tenidos en cuenta en la propia resolución recurrida (apartado II.5 puntos sexto y séptimo). No obstante, y como ya se ha expuesto anteriormente, la recurrente olvida que existen otros elementos adicionales que concurren en el procedimiento de referencia resuelto por esta Comisión.

En efecto, la existencia del procedimiento judicial de suspensión de pagos de RSL en curso, y sus efectos jurídicos sobre el suspenso, obliga a esta Comisión a tener en cuenta que, en las actuales circunstancias jurídicas de RSL (suspenso en pagos), no se le puede obligar a abonar las deudas anteriores al 21 de agosto de 2002 por ser un imposible jurídico (legalmente, y en virtud del antes mencionado principio de respeto a la “par conditio creditorum”, no puede hacerlo aunque quiera y tenga fondos para ello), con lo que esta Comisión no puede resolver en igual sentido que en anteriores ocasiones, donde en virtud de la conservación, en lo posible, de la interconexión entre los operadores entrantes y la red del operador dominante por el carácter de “utilidad esencial” que tiene ésta en el acceso al mercado



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

nacional de servicios de telefonía, siempre se ha concedido un plazo de 5 días naturales al deudor para que pudiese pagar las deudas pendientes y evitar así que se autorizase automáticamente a Telefónica a resolver el AGI y desconectar las redes.

Esta doctrina de la CMT deriva de varias resoluciones en anteriores procedimientos de resolución de Conflictos de Interconexión suscitados por impagos (ver las resoluciones del Consejo de la CMT de 19 de octubre de 2000 -*Expediente nº ME 2000/3021 “impago de American Telecom”*- y de 29 de abril de 2002 -*Expediente nº RO 2002/6202 “impago de Teleconnect”*-; asimismo, ver el Informe Preliminar de los Servicios de la CMT de 30 de mayo de 2001 y la propuesta de resolución de 2 de agosto de 2001 -*Expediente nº ME 2000/3360 “impago de Capcom; finalmente archivado por llegar las partes a un acuerdo amistoso”*-).

Además, no se puede olvidar una cuestión esencial como es, que el objetivo de todo procedimiento judicial de suspensión de pagos es satisfacer los créditos pendientes pero salvaguardando la viabilidad de la empresa deudora. Mientras no se produzcan nuevos impagos, para RSL la interconexión con la red de Telefónica es vital para mantener su viabilidad como operador en el mercado, y en las actuales circunstancias no se menoscaban los derechos y las expectativas de cobro de Telefónica, ya que los créditos derivados de las deudas anteriores al 21 de agosto de 2002 están tuteladas judicialmente en el marco del procedimiento de suspensión de pagos en curso, y los pagos por servicios prestados desde el día 21 de agosto de 2002 se vienen satisfaciendo con normalidad y están además avalados. Si se estimase la solicitud de Telefónica y pudiese desconectar su red de la de RSL, ésta se vería avocada previsiblemente al cierre de muchas de sus actividades esenciales en el mercado, con lo que se estaría impidiendo el ya citado objetivo de la LSP, el mantenimiento de la viabilidad efectiva del suspenso en el mercado.

En atención a lo todo lo anterior, y en tanto en cuanto no se concluya el procedimiento judicial en curso de suspensión de pagos de RSL, la autorización concedida a Telefónica para rescindir el AGI y desconectar su red de la de RSL, como consecuencia de los impagos anteriores al 21 de agosto de 2002, deberá ver previamente suspendidos sus efectos hasta que la misma vuelva a ser ejecutable de manera individualizada por Telefónica, es decir, hasta que concluya el procedimiento de suspensión de pagos en curso de acuerdo con cualquiera de las posibilidades previstas en la ya mencionada LSP.

En atención a todo lo anterior, y vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

## RESUELVE



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por la representación legal de la entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la Resolución de esta Comisión, de fecha 21 de noviembre de 2002, que resuelve el conflicto de interconexión planteado por Telefónica de España, S.A.U. solicitando autorización para resolver el vigente acuerdo general de interconexión con Redes y Servicios Liberalizados, S.A. por impago de servicios de interconexión previamente consumidos, y para desconectar ambas redes (RO 2002/7245), por estar plenamente ajustada a Derecho.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que resuelve un recurso potestativo de reposición, no puede interponerse de nuevo dicho recurso de reposición. No obstante, contra la misma puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.ocho de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Carlos Bustelo García del Real

José Giménez Cervantes